El poder comunista en la justicia peruana

El poder comunista en la justicia peruana

El reciclaje de los camaradas de VR, el MIR y el PCR bajo el comando de Diego Garca-Sayn

A fines de los aos 70 e inicios de los 80, los camaradas de Vanguardia Revolucionaria (VR), del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) comprendieron los lmites de su discurso a favor de la lucha armada maosta o guevarista. Ya no vean a Sendero Luminoso como el aliado del "campo popular", sino que empezaban a tomar distancia, sobre todo cuando en la dcada crtica de los 80 la dinamita, las balas y los coches-bomba dieron alcance a algunos de los dirigentes de la izquierda.

El Per con terrorismo fue terrible. Coches-bomba, los ecos de la dinamita, la guerra interna en los frentes Mantaro, Huallaga y en el mismo escenario capitalino donde operaban el comit metropolitanos de Sendero y el sanguinario y asesino grupo Socorro Popular, el desfile macabro de cadveres, las comunidades asoladas, el atentado ltimo en jirn Tarata de Miraflores (ya en los 90), los apagones constantes, el rastro sangriento de una experiencia desconocida por la nueva generacin.

En ese entonces, entre los activistas de VR, PCR y MIR, que en algn momento se juntarn en el Partido Unificado Mariateguista (PUM), muchos tomaron distancia de esa patologa poltica encabezada por Abimael Guzmn. Pero no lo enfrentaron como era debido, por un sentimiento de culpa: cmo podn enfrentar a Sendero Luminoso que llevaba a la prctica lo que camaradas como Diego Garca-Sayn y Carlos Tapia (ambos del MIR), o Ronald Gamarra (un perifrico del MRTA), entre muchos otros, habn pregonado en las aulas universitarias y las movilizaciones callejeras: la lucha armada?

Enemigos seculares de instituciones como la Fuerza Armada, al no haber cuestionado sin ambigedades el curso terrorista de la aventura senderista, fueron meros testigos de la batalla que se dio en el terreno de las armas y en muchos casos su actividad abon a favor de Sendero Luminoso.

Y es que para entonces, los viejos partidarios de la lucha armada como el vanguardista Francisco Sobern, ya se estaban reciclando en la temtica de los derechos humanos, igual que Sofa Macher y su esposo Hans Landolt, ex militarista en el grupo PCR.

Otros como Nicols Lynch, el popular "Coche bomba" del PCR, a mediados de los aos 80, proponn con carcter de urgencia desmaoizar dicho PCR en la Universidad de San Marcos. Pero no falt entre sus camaradas quien le dijera que primero debera desmaoizar su clula que precisamente se llamaba "Mao Tse Tung". Desde ese momento Lynch leer con fruicin el concepto de ciudadana y descubrir la teora de gobernabilidad de Harvard, es decir la izquierdizante, la sucesora del neoconservador Samuel Huntington.

El reciclaje

Este es el momento del reciclaje de los amigos de Sendero. En efecto, unos virarn al tema de los derechos humanos, que tiene por misin enfrentar a la Fuerza Armada en el nuevo escenario de conflicto (el terreno legal), para lo cual implementan (en el gobierno de Valentn Paniagua) la Comisin de la Verdad, y controlarn la Defensora del Pueblo, en especial en el periodo de Walter Albn, tambin de procedencia roja, no sin antes haber asumido el Ministerio de Justicia con Diego Garca-Sayn.

Para entonces otros habrn implementado grandes ONG como el Instituto de Defensa Legal, de donde procede el camarada Ronald Gamarra; la Comisin Andina de Juristas, de Diego Garca-Sayn (MIR) y Enrique Bernal Ballesteros (PSR). Luego aparecer, para completar el crculo, el consorcio Justicia Viva.

Un tercer grupo anclar en el tema de la descentralizacin, capitaneado por Manuel Dammert Ego-Aguirre, Carlos Barnechea Lercari, Rudecindo Vega Zavaleta.

Otros primos ideolgicos de Abimael Guzmn se instalarn en los temas de la seguridad interna y la temtica de la violencia, como los famosos senderlogos encabezados por Carlos Tapia y un conjunto de "analistas polticos" que opinarn principalmente desde perdicos de los que se sirven.

No se diga que las ONG han sido impolutas en su gestacin y evolucin. Fueron muy pragmticas. Tanto es as que

varias de ellas trabajaron con el gobierno de Alberto Fujimori, en especial en el terreno de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como ha sucedido con la Comisión Andina de Juristas, de Diego García-Sayán.

Para muestra, un botón: Abraham Siles Vallejos, de Justicia Viva, ha sido un funcionario PNUD que trabajó en el llamado proceso de Modernización y Reforma del Poder Judicial los años 1997, 1998 y 1999.

Pero a la caída de Fujimori y la instauración del gobierno de transición exigieron su cuota de poder básicamente en dos frentes: el control del Ministerio de Justicia y del aparato judicial, a través de procuradores Ad Hoc y una red de fiscales y jueces. Y el copamiento de la millonaria cooperación internacional que por entonces llegaba a 360 millones de dólares anuales.

Liberación de terroristas

La red de justicia manejada por el poder comunista, empieza allí. La capitanea García-Sayán, quien asume el cargo el 25 de noviembre del 2000. Lo primero que hace el antiguo impulsor de invasiones de tierras en su época guerrillera es firmar, el mismo día de su asunción al cargo, dos resoluciones con carácter de "estrictamente secreto" (no publicables en El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel.

Una semana después firmar otras once resoluciones supremas, estas también publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos.

Tres días después se publicarán otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de subversivos. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras 10 normas de indulto a condenados por "traición a la patria".

En dos semanas García-Sayán indultó a 31 terroristas. Este fue apenas el inicio de su política de "humanización" de los establecimientos penales, de flexibilización carcelaria, en fin de liberación de miles de terroristas.

Los cómplices

Cuando fuera titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores Ad Hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (de la ONG IDL) a la procuraduría, en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001 lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, derecho de gracia y conmutación de penas para los casos de terrorismo.

Quienes conocen el pasado de Ciurlizza afirman que militó en la filas del PCR. No olvidemos que es el mismo personaje de los famosos audios Ciurlizza, quien fue a negociar y/o conferenciar a la Base Naval con los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA varios puntos de agenda, como la famosa flexibilización carcelaria, y la misma composición de la Comisión de la Verdad, de la cual posteriormente Ciurlizza habrá de ser secretario ejecutivo. Últimamente se afirma que García-Sayán ha implantado a Ciurlizza en Relaciones Exteriores.

Otro integrante de la maquinaria comunista en justicia ha sido Iván Bazán Chacón, de la ONG Fedepaz (Fundación EcuMónica para el Desarrollo y la Paz). Fue el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y Conmutación de Penas.

Esta red mantuvo en la procuraduría Ad Hoc a José Ugaz, de la ONG Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero lo reforzó con Ronald Gamarra, cuyo historial es bien conocido, no solo en las aulas de San Marcos, sino como activista de Pueblo en Marcha que, junto a la Unidad Democrática Popular de Cecilia Oviedo, hoy exiliada en México, eran el brazo legal del MRTA.

El fundamentalismo de Gamarra y su actitud carcelera para con los militares y policías acusados de presuntos delitos de violación de derechos humanos tiene pues este ingrediente. Y lo ha dicho en más de una oportunidad: no es imparcial. Y tiene muchas razones para no serlo, como se demostrará si es necesario.

No obstante que el gobierno de Alejandro Toledo ha tomado debida nota del juego propio en que estaban inmersos estos personajes que usaban sus cargos y la política anticorrupción para sus venganzas político-ideológicas, el nuevo procurador formó parte de la misma vertiente: Antonio Maldonado también fue militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Y las mismas circunstancias se dan en el Ministerio Público, donde ejerce el poder comunista el hoy fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, que también fuera del PCR en las aulas sanmarquinas.

En el Poder Judicial el máximo exponente de la famosa red es el vocal supremo César San Martín Castro, socio del

estudio Ugaz, que es el principal estudio jurídico del poder comunista en la Justicia, y teórico de buena parte de la legislación antigarantista en materia anticorrupción. Es el creador de la figura jurídica de "complicidad en peculado" que ha servido para encarcelar a los enemigos políticos de la izquierda caviar y a los fujimoristas.

El grupo reciclado de los camaradas tiene además sus tontos útiles y sus clientes en la Judicatura. Entre los primeros está obviamente Valentín Paniagua Corazao. Para algunos también podría estar en esta categoría Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia y asesor del Ceriajus.

El poder comunista en la Justicia, en especial del IDL y Justicia Viva, se dice que han sometido a prebendas académicas, sociales y de promoción mediática de sus causas a varias magistradas anticorrupción: Inés Felipa Villa Bonilla, Inés Tello Valcárcel de Ecco, Hilda Cecilia Piedra Rojas, Araceli Baca Cabrera, Susana Inés Castañeda Otsu, Carlos Ventura Cueva y Saúl Peña Farfán.

En el área administrativa estuvo en la secretaría técnica del Poder Judicial la abogada Rosa Mavila León, ex dirigente del PCR, precisamente en el periodo en que fuera presidente de la Corte Suprema el doctor Hugo Sibina Hurtado.

En las ONG operan los siguientes personajes de ideología comunista:

- Ernesto de la Jara, ex PCR y actual director general del Consorcio Justicia Viva y también alto directivo del IDL.
- David Lovatán Palacios, director general del IDL.
- Abraham Siles Vallejos, coordinador general de Justicia Viva.
- Carlos Rivera Paz, ex PUM, coordinador legal de Justicia Viva.

Otros personajes gravitantes son:

- Gino Costa, ex militante del Partido Socialista Revolucionario (PSR) y ex viceministro de Justicia y ministro del Interior.
- Francisco Soberón, ex VR y de la ONG Aprodeh.
- Sofía Macher (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos).
- Miguel Jugo

También están implicados en la organización Ernesto Cáceres, ex secretario general del PUM y Miguel Huerta.

LA RAZON - Informe Especial

03 de enero del 2006